

Violencia escolar: la otra responsabilidad

Lo que ha ocurrido en distintos establecimientos educacionales del país no puede leerse solo como hechos aislados ni como crisis puntuales dentro de una sala de clases. Detrás de cada episodio hay trayectorias, entornos y ausencias que exceden lo escolar. Y en esa lectura más amplia, hay una pregunta incómoda que sigue quedando fuera del debate: ¿qué rol está jugando hoy la familia?

Se ha instalado con fuerza —y con razón— la exigencia hacia docentes, equipos directivos y comunidades educativas. Se les pide contención, protocolos, prevención y resultados. Pero esa presión, muchas veces, se construye como si la escuela fuera un espacio autosuficiente, capaz de corregir por sí sola conductas que se forman fuera de ella. Ahí hay un problema de fondo: estamos cargando en la escuela responsabilidades que no le pertenecen completamente.

La convivencia no se enseña solo con reglamentos ni con talleres esporádicos. Se aprende —o no— en la vida cotidiana, en la casa, en los vínculos más cercanos. Cuando ese espacio falla o se debilita, la escuela recibe esa fractura. Y por mucho esfuerzo que exista desde el mundo educativo, hay límites evidentes si no hay un trabajo compartido.

En Aysén, esta discusión todavía puede abordarse con tiempo. La región no enfrenta los niveles de violencia que se ven en otras zonas del país, pero eso no es garantía de nada. Pensar que aquí “no pasa” es el primer paso para que empiece a pasar. Tampoco sirve sobredimensionar cada conflicto. El equilibrio es clave: mirar con atención, sin alarmismo, pero sin negación.

La ventaja de Aysén es su escala. Las comunidades son más pequeñas, los vínculos más cercanos, y eso permite algo que en otros lugares es más difícil: actuar a tiempo. Pero esa misma cercanía también deja en evidencia cuando la familia se desentiende o delega completamente la formación en terceros.

No se trata de culpar ni de simplificar un

problema complejo. Las familias también enfrentan presiones reales: jornadas extensas, dificultades económicas, falta de redes de apoyo. Pero reconocer esas condiciones no puede transformarse en excusa para desaparecer del proceso formativo. La ausencia también educa, aunque no sea de la forma que se espera.

Aquí hay una tensión que no se puede seguir evitando: mientras más se exige a la escuela, menos se conversa sobre lo que ocurre puertas adentro del hogar. Y sin ese equilibrio, cualquier política educativa queda incompleta.

Si de verdad se quiere avanzar hacia espacios educativos más seguros, la conversación debe ampliarse. No basta con mejorar protocolos o aumentar la vigilancia. Se necesita fortalecer el vínculo entre escuela y familia, pero desde un compromiso real, no solo desde reuniones formales o firmas en un reglamento.

Aysén tiene la oportunidad de anticiparse. De no repetir errores que en otras regiones ya son evidentes. Pero eso exige asumir que la convivencia escolar no es un problema exclusivo del sistema educativo. Es un reflejo de cómo nos estamos relacionando como sociedad.

El riesgo no está solo en los hechos de violencia que ya se han visto, sino en la normalización silenciosa de conductas que antes eran excepcionales. Cuando eso ocurre, ya no se trata de casos puntuales, sino de un deterioro más profundo.

La pregunta, entonces, no es solo qué están haciendo las escuelas. La pregunta es qué estamos haciendo como familias, como comunidad, como territorio.

Porque si la formación se delega por completo, lo que se pierde no es solo disciplina en el aula. Lo que se pierde es algo más básico: la capacidad de convivir. Y eso, a la larga, no hay sistema educativo que lo repare por sí solo.